



## ACLARACIÓN DE VOTO

Medellín, veintidós de enero de dos mil veinticuatro

Ref.: Exp.: 05001 31 03 001 2018 00243 03

Proceso: Ejecutivo.

Demandante: ALEJANDRO RUIZ BOHORQUEZ.

Demandado: JOHN JAIRO ORTEGA ROJAS.

Con el debido respeto, manifiesto que me aclaro el voto en relación con ciertas consideraciones que fundamentan la decisión de fondo, con base en lo siguiente:

Se indica en la ponencia que el pagaré que sirve de base para la ejecución carece de los elementos de claridad y expresividad. Se expresa que:

(...) si bien en el instrumento en cobro *ab initio* se dijo que los deudores “*nos comprometemos a pagar incondicionalmente a la orden de*”, también lo es que tal compromiso se ató a que los deudores consolidaran un patrimonio autónomo, desarrollaran un proyecto inmobiliario, y edificaran sobre varios lotes, todo ello sobre unos globos de terreno en preciso, y de los que incluso se especificaron sus matrículas inmobiliarias.

Es más, en tal compromiso los obligados se comprometieron a incorporar tales predios al aludido patrimonio autónomo, asumiendo el compromiso de no poder venderlos ni cederlos, pese a que como dice en el cartular sobre tales inmuebles, que “ *fueron adquiridos por los deudores*”.

Es decir, la obligación de pago que se plasmó al pagaré, no era (como lo ha dicho la doctrina), pura y simple, sino, que estaba relacionada con múltiples negociaciones, todas ellas que en últimas convergían en un proyecto inmobiliario.

Para el suscrito, el problema de fondo para la resolución del caso concreto debió centrarse en los ámbitos del “endoso” y de la “causalidad” y no en el título o instrumento propiamente tal; eso sí, teniendo en cuenta los límites que en el ámbito de las excepciones impone el artículo 784.12 del Código de Comercio. Los problemas fundamentales se vinculan propiamente con esta excepción, y no con el título de la pretensión ejecutiva: el primero, referido a si el demandante podría o no considerarse “tenedor de buena fe exenta de culpa” y, el segundo sobre las carencias propias de la causa que sustentaba el instrumento cartular.

Estoy de acuerdo con las consideraciones ofrecidas por el juzgado del circuito. Al revisar el tenor literal de pagaré se evidencian quiénes son sus otorgantes, su acreedor, la fecha de creación (12 de junio de 2015), la suma debida (\$1.200.000.000), el plazo (4 meses calendario contados a partir de su suscripción, esto es, 12 de octubre de 2015). Igualmente se pactaron intereses. En los términos del artículo 709 del estatuto mercantil, hay “1) *La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero*; “2) *El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago*; “3) *La indicación de ser pagadero a la orden o al portador*, y “4) *La forma de vencimiento*”. Asimismo, los requisitos generales del artículo 621 *ibidem* también se satisfacen, en sentido de contener: “1) *La mención del derecho que en el título se incorpora*, y 2) *La firma de quién lo crea*”.

En ningún momento se estableció la condición que en la ponencia se advierte y por la que se da al traste con la ejecución; todo lo contrario, los deudores aceptaron la orden incondicional manifestando: “*nos comprometemos a pagar incondicionalmente a la orden de*”. Que se transcriba, entre paréntesis, el contenido del negocio causal no desdibuja el carácter vinculante del título; sus dos primeras cláusulas, como bien lo dijo el *a quo* expresan la incondicionalidad.

Pienso que la interpretación sobre el compromiso de los deudores no es condición del título como tal. Nunca fue otorgado el pagaré sometido a este tipo de vencimiento al que se refiere en la ponencia; la orden incondicional de pagar una suma de dinero es lo suficientemente expresa y clara. El destino del dinero y la obligación de pagar consignada en el título son aspectos no coincidentes, que no tienen por qué confundirse.

Vale destacar que, en el instrumento cautelar, en su cláusula octava, se autorizó igualmente, sin restricción alguna, el endoso del documento a efectos de posibilitar su libre circulación. Otro asunto, y esto ya es propio de la excepción, es que se cuenta con prueba suficiente para sostener que el demandante no es tenedor, como bien se explica en la ponencia: obran las declaraciones de uno de los endosantes y del endosatario (demandante) que revelan que el título no se transfirió en propiedad, y que quien ahora demanda solo presentó el instrumento con la intención de cobrarlo, haciendo uso de las facultades que le otorga la procuración o el mandato, pero nada más.

Así las cosas, era la excepción el marco propio para evaluar las posibilidades de ejecución frente a un título valor que cumple íntegramente sus requisitos formales y sustanciales. La literalidad y autonomía del pagaré, en los términos del artículo 619 del Código de Comercio, son manifiestas. Lo que tenemos, más bien, en el caso concreto es que probaron los temas de causalidad y de endoso argüidos en las excepciones propuestas.



**MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ**

Magistrado